

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por AMPARO DE JESÚS ESTRADA LONDOÑO contra LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-, y la señora MARÍA DEL CONSUELO CASTRO RIOS (Rad. No. 05001-31-05-002-2017-00954-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- a la abogada YESSICA ZAPATA RAMÍREZ, con tarjeta profesional No. 260.650 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes como cónyuge supérstite del señor Jorge Saldarriaga Espinosa, quien falleció el 25 de julio de 1995, dado que para dicha fecha tenía la sociedad conyugal vigente; se declare que la señora María del Consuelo Castro Ríos no es la única beneficiaria de la pensión de

sobrevivientes como compañera permanente del causante; el retroactivo pensional, la indexación de las condenas y las costas (fls.3/4).

Los anteriores pedimentos los fundamenta en los siguientes hechos: contrajo matrimonio con el señor Jorge Saldarriaga Espinosa el 6 de abril de 1964, fecha a partir de la cual convivieron bajo el mismo techo hasta el 25 de julio de 1995, momento de su muerte; de dicho matrimonio procrearon 4 hijos, de los cuales uno ya se encuentra fallecido y los otros eran mayores de edad para la muerte de su padre: el señor Saldarriaga Espinosa procreó fuera del matrimonio dos hijas con la señora María del Consuelo Castro Ríos, de nombres Liliana y Maritza Saldarriaga Castro; el señor Jorge Saldarriaga Espinosa era pensionado por el ISS -hoy Colpensiones- al momento de su muerte, y era quien velaba económicamente por el hogar conformado con ella; el 13 de octubre de 1995, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó ante el ISS la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada con el argumento que no se probó la convivencia al momento de su muerte; mediante Resolución 831 de 1996, el ISS decidió reconocer la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor Jorge Saldarriaga Espinosa a la señora María del Consuelo Castro Ríos, en calidad de compañera permanente y a las menores Liliana y Maritza Saldarriaga Castro, quienes hoy son mayores de edad; la Resolución 831 de 1996 emitida por el ISS no le fue notificada, frente a lo cual solicitó copia del edicto, sin que nunca fuera entregada, motivo por el que se entiende que no fue notificada para ejercer su derecho de defensa; el 22 de julio de 2016 solicitó nuevamente ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada nuevamente por la entidad mediante Resolución No. 277756 del 19 de diciembre de ese año, notificada el 10 de noviembre siguiente; y confirmada dicha decisión mediante Resolución GNR 377050 del 12 de diciembre de 2016 (fls. 3 y 4).

La señora María del Consuelo Castro Ríos atendió de manera oportuna la demanda. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos adujo que eran ciertos los que hacen referencia al reconocimiento de la prestación tanto a ella como a sus hijas y que el causante era pensionado.

Sobre los demás dijo que no le constaban o que no eran ciertos. Como excepción previa propuso las de prescripción y caducidad. Como excepciones de mérito formuló las de temeridad y mala fe (fls. 25 a 32)

La entidad demandada dio respuesta oportuna al escrito inicial. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Frente a los hechos manifestó que eran ciertos los del matrimonio, el fallecimiento del pensionado y la negación de la solicitud presentada por la demandante. Sobre los demás dijo que no le constaban. Como excepciones formuló las de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora, prescripción, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación y compensación (fls. 38 a 44).

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del 26 de mayo de 2020, ABSOLVIÓ tanto a la señora MARIA DEL CONSUELO CASTRO RIOS como a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora AMPARO DE JESÚS ESTRADA LONDOÑO, al declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación. Le impuso las costas a la demandante en favor de la señora María Consuelo Castro Ríos y Colpensiones, fijándole como agencias en derecho la suma de \$150.000 a favor de cada una.

La Sala conoce del asunto por el grado de la consulta.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión en el plenario, el fallecimiento del señor Jorge Saldarriaga Espinosa el 25 de julio de 1995 (fl. 17), quien para dicha data era pensionado por el ISS -hoy Colpensiones-; el matrimonio que éste contrajo con la señora Amparo de Jesús Estrada Londoño el 6 de abril de 1964 (fl. 18), y que el ISS -hoy COLPENSIONES-, le reconoció una pensión de sobrevivientes a la señora María Consuelo Castro Ríos, en calidad de compañera permanente, y a sus hijas menores Liliana y Maritza Saldarriaga Castro, con ocasión de la muerte del señor Saldarriaga Espinosa, mediante Resolución 831 del 1° de enero de 1996.

En este orden de ideas, a partir de lo que es materia de consulta, corresponde a la Sala determinar si a la señora Amparo de Jesús Estrada Londoño le asiste el derecho a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Jorge Saldarriaga Espinosa.

Ahora bien, por la fecha de la muerte del señor Saldarriaga Espinosa se tiene que la normatividad a aplicar es la inserta en la Ley 100 de 1993 original, dado que su fallecimiento ocurrió el 25 de julio de 1995. Sobre esta materia debe recordarse, siguiendo para el efecto claras directrices establecidas por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que las regulaciones aplicables son las vigentes al momento de la muerte del afiliado: *“La Corte ha señalado de antaño, que es la fecha del fallecimiento del causante la que determina la normatividad aplicable para efectos del reconocimiento de la prestación de sobrevivencia”* (SL 343-2018).

Para el caso de autos, resulta ser el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que a la letra dice:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

<aparte tachado INEXEQUIBLE> En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deber acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;...”

Ahora bien, para quien pretenda ser beneficiaria (o) de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 2 años con el causante del derecho, teniendo en cuenta que dicho lapso de tiempo aplica para el evento en que quien fallece es un pensionado (a).

Antes que nada, valga decir que corresponde al juzgador establecer, en aplicación de las reglas de la sana crítica, cuál de las pruebas adquiere mayor valor o se estima ostenta mayor grado de pertinencia y conducencia para acreditar un hecho determinado, para así poder dilucidar con adecuado tino jurídico al planteamiento sometido a discusión, tal cual lo tiene adocinado la jurisprudencia laboral, entre otras, en reciente decisión dictada el 12 de julio de 2017, SL10192-2017, rad. 45551.

Partiendo entonces de lo anterior, no le cabe la menor duda a esta Sala de Decisión que razón le asiste al juez de instancia para negar las pretensiones impetradas por la señora Amparo de Jesús Estrada Londoño, en tanto y en cuanto, el factor determinante para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en la versión original de la Ley 100 de 1993, es la convivencia real y efectiva con el pensionado fallecido hasta el momento de su muerte, entendiendo por convivencia la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

“...es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605).

Siendo lo anterior cierto, la demostración de la calidad de cónyuge supérstite no resulta suficiente para acceder a la pensión de sobrevivientes bajo los postulados del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, sino que está a su cargo igualmente la demostración de la convivencia real y efectiva con el causante por un plazo no inferior a 2 años anteriores a su fallecimiento.

En este sentido, y descendiendo al caso de autos, encuentra esta Corporación que luego de analizar efectivamente las probanzas obrantes al interior del plenario, especialmente el interrogatorio de la señora Amparo de Jesús Estrada Londoño, quien pretende la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite, se evidencia que ella misma confiesa que convivió con el señor Jorge Saldarriaga Espinosa por espacio de 19 o 20 años, esto es, desde la fecha de su matrimonio, que lo fue el 6 de abril de 1964, y hasta el año 1984, 1985 aproximadamente, es decir, la convivencia se interrumpió 10 años antes de la muerte del señor Saldarriaga Espinosa, lo que indudablemente da al traste con sus pretensiones, conllevando entonces a la confirmación de la sentencia venida en consulta, pues en este sentido debe dársele todo el valor a lo dispuesto por el artículo 191 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por así disponerlo su artículo 145.

No está de más señalar que los testigos traídos al proceso, tanto de una parte como de la otra, son contestes al señalar que el señor Jorge Saldarriaga Espinosa había abandonado el hogar que conformaba con su cónyuge Amparo de Jesús Estrada Londoño y había conformado un nuevo núcleo familiar con

la señora María del Consuelo Castro Ríos, llegando a manifestar incluso al unísono que la velación del causante fue en la casa de esta última.

Debe señalar esta Sala de Decisión laboral que la excepción que trae consigo el referido artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a que no se debe demostrar la convivencia de quien pretenda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes cuando se haya procreado uno o más hijos con el pensionado, se refiere única y exclusivamente a que tal procreación haya ocurrido única y exclusivamente si la misma se dio en los 2 años anteriores al fallecimiento del pensionado fallecido, tal como lo tiene adoctrinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias con Radicado CSJ SL, 8 feb. 2002, rad. 16600, reiterada en CSJ SL, 27 de octubre de 2010, rad. 35362, donde dijo:

“Ahora bien, ya sin ninguna incidencia en la decisión y sólo con miras a hacer las correcciones doctrinarias pertinentes, es bueno señalar lo siguiente: El recurrente enrostra al Tribunal haber interpretado erróneamente el artículo 9º del Decreto 1889 al considerar que en tal precepto se dispuso que el hecho de procrear hijos puede suplir el término de convivencia señalado en las disposiciones legales para acceder a la pensión de sobrevivientes; reparo en el que le asiste plena razón porque dicho precepto legal en modo alguno hace ese tipo de regulación.

Sobre ese tema la Sala se pronunció en el fallo atrás transcrito, a propósito de fijar el alcance del artículo 47 de la Ley 100, y allí asentó que uno de los requisitos para acceder la esposa o la compañera permanente a la pensión de sobrevivientes es “haber convivido con el pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, requisito éste que puede suplirse con el de haber procreado uno a más hijos con él”.

En ese orden de ideas, es claro que ya frente al citado artículo 47 erró el sentenciador de segunda instancia, por cuanto el requisito de procrear hijos no suple la falta convivencia al momento de la muerte sino el de la convivencia continua durante los dos años anteriores a la muerte.”

Condición esta que no acreditó la demandante por cuanto el menor de sus hijos ya era mayor de edad al momento del fallecimiento de su padre, pues tal

situación se deduce del interrogatorio de parte de la demandante cuando expresa que su esposo se fue de la casa cuando su hijo menor se iba a graduar del colegio, que lo fue más o menos, según sus dichos, para el año 1984 o 1985, lo que implica que tampoco encaja dentro de la salvedad de la norma para acceder al derecho pretendido.

Extraña a esta Sala de Decisión las manifestaciones reiteradas de la señora Amparo de Jesús Estrada Londoño acerca de la supuesta dependencia económica que tenía de su esposo, cuando analizada la investigación administrativa allegada al proceso, se puede evidenciar de su historia laboral, que estuvo vinculada laboralmente y afiliada al Sistema de Pensiones desde el año 1974, cotizando de manera interrumpida hasta el año 1999, data para la cual alcanzó la densidad mínima de cotizaciones exigidas por la norma que le era aplicable para acceder a la pensión de vejez, que luego le fue reconocida por el ISS -hoy Colpensiones- mediante Resolución 013893 de 2000, y si bien, por el solo hecho de su trabajo no se puede deducir una dependencia total, si se puede deducir que la colaboración que le brindaba su cónyuge no resultaba fundamental como parece hacerlo ver la actora.

En conclusión, y sin necesidad de otro tipo de razonamientos, el fallo venido en consulta se habrá de confirmar, dando cuenta de ello en la parte resolutive de la presente providencia. Sin costas en esta instancia, dada la manera en que se conoce del asunto.

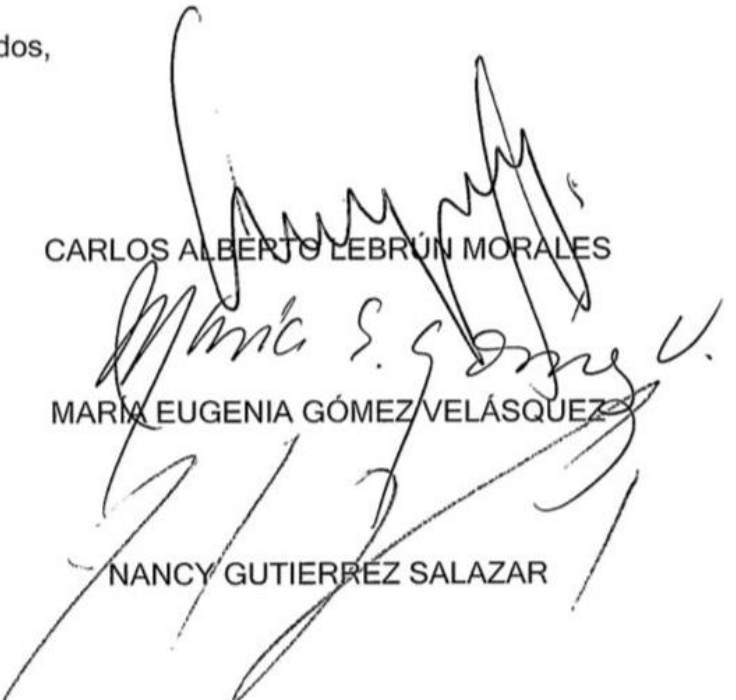
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo venido en consulta, incluido lo relativo a las costas.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez
MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 98 fijados el 8 de junio de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario